Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha catorce (14) de agosto de dos mil veinticuatro.

**VISTOS** los expedientes electrónicos formados con motivo del recurso de revisión número **01588/INFOEM/IP/RR/2023 y 01589/INFOEM/IP/RR/2023 acumulados**, promovido por **XXX XXX**, en lo sucesivo la **RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de Chalco**, en lo sucesivo el **SUJETO OBLIGADO,** se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

## **ANTECEDENTES**

1. El veinte de febrero de dos mil veintitrés, sepresentaronvía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** las solicitudes de información pública registradas con el número **00075/CHALCO/IP/2023 y 00074/CHALCO/IP/2023,** en la que se requirió lo siguiente:

**00075/CHALCO/IP/2023:**

***“****Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 6° (sexto) y 8° (Octavo) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 1, 4, y 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 3, fracción XLI, Capitulo III, 23, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios Solicito la siguiente información actualizada al día de la entrega de la misma del Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Públicacon fundamento del artículo 58 Quater de Ley de Seguridad del Estado de México. Artículo 58 Quáter. Para ocupar el cargo de Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública se deberán satisfacer los siguientes requisitos, con independencia de los que se establezcan en los Lineamientos Específicos del Consejo Estatal: I. Ser ciudadano o ciudadana del Estado de México, preferentemente vecino del municipio, en pleno uso de sus derechos; II. No estar inhabilitado o inhabilitada para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública; III. No haber sido condenado o condenada en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de libertad; IV. Tener Licenciatura y preferentemente especialización en seguridad pública, o contar con experiencia mínima de un año en la materia; V. Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia. Solicito los documentos actualizados que acrediten lo dicho en el artículo 58 Quater de la Ley de Seguridad del Estado de México antes mencionada. También los siguientes documentos actualizados a la fecha de la entrega en caso de que alguno contenga datos personales y/o sensibles en versión pública Curricular Vitae, Cedula Profesional, Documento que acredite la Certificación de Control de Confianza, Documento que acredite el Certificado Único Policial, documento que acredite no estar Inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado ni en ninguna otra Entidad Federativa, Recibo de Nómina y/o de Remuneración” (Sic)*

**00074/CHALCO/IP/2023:**

*“Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 6° (sexto) y 8° (Octavo) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 1, 4, y 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 3, fracción XLI, Capitulo III, 23, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios Solicito la siguiente información actualizada al día de la entrega de la misma del Director de Seguridad Publica Tránsito y Bomberos con fundamento del artículo 22 Bis de Ley de Seguridad del Estado de México. Artículo 22 Bis. Para ocupar el cargo de Director de Seguridad Pública Municipal o su equivalente, se deberán satisfacer los requisitos siguientes: I. Ser ciudadano o ciudadana del Estado de México, preferentemente vecino del municipio, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; II. No estar inhabilitado o inhabilitada para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública; III. No haber sido condenado o condenada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad; IV. Tener Licenciatura y preferentemente especialización en seguridad pública, o contar con experiencia mínima de un año en la materia, y V. Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia. Solicito los documentos que acrediten lo dicho en el artículo22 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de México antes mencionada. También los siguientes documentos actualizados a la fecha de la entrega en caso de que alguno contenga datos personales y/o sensibles en versión pública Curricular Vitae, Cedula Profesional, Documento que acredite la Certificación de Control de Confianza, Documento que acredite el Certificado Único Policial, documento que acredite no estar Inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado ni en ninguna otra Entidad Federativa, Recibo de Nómina y/o de Remuneración” (Sic)*

1. Se señaló como modalidad de entrega de la información: **A través del SAIMEX.**
2. El veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, el **SUJETO OBLIGADO** emitió respuesta, en los mismos términos:

*“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafos trece, catorce y quince fracciones I a VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 12, 53 fracciones II, V y VI, y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento y notificación de la respuesta emitida por la servidora pública habilitada, la Titular de la Dirección de Administración, en los siguientes términos: Se adjunta oficio de respuesta a la solicitud de información con número de folio 00074/CHALCO/IP/2023. Considerando que requirió la respuesta a su solicitud de información pública mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX); se le notifica por dicha vía la respuesta anterior. Así mismo le informo que en términos de los artículos 176, 177, 178 y 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, tiene el derecho de interponer el Recurso de Revisión en un plazo de 15 días hábiles siguientes a partir de la presente fecha, en caso de considerar que la respuesta es desfavorable a su solicitud.” (Sic)*

Archivos electrónicos adjuntos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Folio Solicitud** | **Documentos** |
| **00075/CHALCO/IP/2023**  | [**Solicitud de Información 75-CHALCO-IP-2023.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1739529.page): Oficio GCH/DA/175/2023 suscrito por la Directora de Administración, por medio del cual, refirió hacer entrega de la credencial para votar, constancia de no inhabilitación, Certificado de No Antecedentes Penales, y Grado de Maestría en Derecho Procesal Penal del Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Asimismo, respecto al certificado de control de confianza y el certificado único policial, informó que, después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y digitales que obran en la Subdirección de Recursos Humanos, no se encontraron dichos documentos. Por otra parte, señaló que el currículum y el recibo de nómina, podían ser consultados a través de los enlaces: <https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/CHLACO/art_92_xxi/4.web> y <https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/CHALCO/art_92_viii/4.web>, respectivamente.[**Documentos anexos.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1740206.page): Documento de cuatro páginas, consistente en la copia digitalizada de la credencial para votar, constancia de no inhabilitación, Certificado de No Antecedentes Penales, Certificado de no deudor alimentario moroso y Grado de Maestría en Derecho Procesal Penal del Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública. |
| **00074/CHALCO/IP/2023** | [**Solicitud de Información 74-CHALCO-IP-2023.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1739527.page):Oficio GCH/DA/175/2023 suscrito por la Directora de Administración, por medio del cual, refirió hacer entrega de la credencial para votar, constancia de no inhabilitación, Certificado de No Antecedentes Penales y Certificado de Estudios Totales de Maestría en Derecho Penal del Director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos. Asimismo, respecto al certificado de control de confianza y el certificado único policial, informó que, después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y digitales que obran en la Subdirección de Recursos Humanos, no se encontraron dichos documentos. Por otra parte, señaló que el currículum y el recibo de nómina, podían ser consultados a través de los enlaces: <https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/CHLACO/art_92_xxi/4.web> y <https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/CHALCO/art_92_viii/4.web>, respectivamente.[**Documentos anexos.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1740205.page): Documento de cuatro páginas, consistente en la copia digitalizada de la credencial para votar, constancia de no inhabilitación, Certificado de No Antecedentes Penales, Certificado de no deudor alimentario moroso y Certificado de Estudios Totales de Maestría en Derecho Penal del Director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos. |

1. El veintitrés de marzo de dos mil veinticuatro, el **RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión **01588/INFOEM/IP/RR/2023 y 01589/INFOEM/IP/RR/2023** respectivamente, en los mismos términos, manifestando como:

|  |  |
| --- | --- |
| **01588/INFOEM/IP/RR/2023****00075/CHALCO/IP/2023** | **Acto impugnado**:*”Informacion incompleta” (Sic)***Razones o Motivos de inconformidad**: *”Con fundamento en el artículos 176, 178 y 179 Fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, hago referencia la respuesta a mi solicitud que no cumplen con lo solicitado. La respuesta está incompleta* ***falta documentación además de que la que presenta no está actualizada como lo solicite, por otra parte la Subdirección de Recursos Humanos hace mención que no encontró parte de la documentación, en su respuesta hace mención de unos link para visualizar la información pero no aparece los documentos solicitados a nombre de JOSE JUAN ROMERO ZAMORA*** *Lo que* ***Solicito documentos actualizados que acrediten lo dicho en el artículo 58 Quater de la Ley de Seguridad del Estado de México antes mencionada****.* ***También los siguientes documentos actualizados a la fecha de la entrega en caso de que alguno contenga datos personales y/o sensibles en versión pública Curricular Vitae, Cedula Profesional, Documento que acredite la Certificación de Control de Confianza, Documento que acredite el Certificado Único Policial, documento que acredite no estar Inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado ni en ninguna otra Entidad Federativa, Recibo de Nómina y/o de Remuneración”*** *(Sic)* |
| **01589/INFOEM/IP/RR/2023****00074/CHALCO/IP/2023** | **Acto impugnado***: ”Informacion incompleta” (Sic)}***Razones o Motivos de inconformidad**: *“Con fundamento en el artículos 176, 178 y 179 Fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, hago referencia la respuesta a mi solicitud que no cumplen con lo solicitado.* ***La respuesta está incompleta falta documentación además de que la que presenta no está actualizada como lo solicite, por otra parte la Subdirección de Recursos Humanos hace mención que no encontró parte de la documentación, en su respuesta hace mención de unos link para visualizar la información pero no aparece los documentos solicitados a nombre de JOSE JUAN ROMERO ZAMORA Lo que Solicito documentos actualizados que acrediten lo dicho en el artículo 58 Quater de la Ley de Seguridad del Estado de México antes mencionada. También los siguientes documentos actualizados a la fecha de la entrega en caso de que alguno contenga datos personales y/o sensibles en versión pública Curricular Vitae, Cedula Profesional, Documento que acredite la Certificación de Control de Confianza, Documento que acredite el Certificado Único Policial, documento que acredite no estar Inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado ni en ninguna otra Entidad Federativa, Recibo de Nómina y/o de Remuneración****” (Sic)* |

1. Se registraron los recursos de revisión bajo los números de expediente **01588/INFOEM/IP/RR/2023 y 01589/INFOEM/IP/RR/2023**; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turnaron a los **Comisionados María del Rosario Mejía Ayala**, **Guadalupe Peña Ramírez**, **Sharon Martínez Morales** y **José Martínez Vilchis,** respectivamente, para su análisis.
2. Posteriormente, en la **Décima Séptima Sesión Ordinaria,** celebrada el diez de mayo de dos mil veintitrés, el Pleno de este Órgano Autónomo ordenó la acumulación del recurso de revisión **01589/INFOEM/IP/RR/2023** al diverso **01588/INFOEM/IP/RR/2023**, a efecto de que esta Órgano Garante formulara y presentara el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con el numeral ONCE, incisos b) y c), de los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como de los
3. Se registraron los recursos de revisión bajo el número de expediente al rubro indicado, asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turnaron a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala,** para su análisis.
4. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través de los acuerdos de admisión del veintiocho de marzo y once de abril de dos mil veintitrés, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a derecho convinieran, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda al caso concreto, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara el Informe Justificado procedente.
5. El **SUJETO OBLIGADO** no rindió los informes justificados respectivos; por su parte, el **RECURRENTE** no presentó pruebas o alegatos que a su derecho convinieran.
6. El treinta de mayo de dos mil veintitrés, se notificó el acuerdo mediante el cual se amplió el plazo para emitir resolución por un término de 15 días adicionales.
7. Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
8. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
9. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
10. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
11. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

1. Por ello, este Organismo Garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
2. La Comisionada Ponente decretó el cierre de instrucción mediante acuerdo del tres de julio de dos mil veinticuatro; por lo que se ordenó turnar el expediente a resolución, misma que ahora se pronuncia; y -------------------------------------------------------------------------------------

## **C O N S I D E R A N D O**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del **SAIMEX,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, de tal forma que el plazo para interponer el recurso transcurrió del uno al diecinueve de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, si el **RECURRENTE** presentó su inconformidad el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el artículo 178 de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios** vigente.
2. Consecuentemente, el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de la materia actual, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

## **TERCERO. Planteamiento de la Litis.**

1. El **RECURRENTE** solicitó del Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública y del Director de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos:
2. **Ser ciudadano o ciudadana del Estado de México, preferentemente vecino del municipio, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;**
3. **No estar inhabilitado o inhabilitada para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública;**
4. **No haber sido condenado o condenada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad;**
5. **Tener Licenciatura y preferentemente especialización en seguridad pública, o contar con experiencia mínima de un año en la materia, y**
6. **Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia.**
7. **Currículum vitae**
8. **Cédula profesional;**
9. **Certificación de control de Confianza;**
10. **Certificado Único Policial**
11. **No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.**
12. **Recibo de Nómina.**
13. En respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** entregó diversa información.
14. En consecuencia, el **RECURRENTE** manifestó su inconformidad mediante recurso de revisión, al referir: **la entrega de información incompleta.**
15. En este sentido, este Organismo Garante advierte que las razones o motivos de inconformidad manifestados por el **RECURRENTE** sugieren que la respuesta proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO** no cumplió con los principios contendidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
16. Por lo anterior, la *Litis* a resolver en el presente recurso se circunscribe en determinar si el **SUJETO OBLIGADO** actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión establecidas en el artículo 179 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que se transcriben a continuación:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***V. La entrega de información incompleta;***

*(…)”*

**CUARTO. Del estudio y resolución del recurso de revisión.**

1. **Del Derecho de Acceso a la Información.**
2. El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México.
3. Definiendo el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[1]](#footnote-1)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[2]](#footnote-2)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[3]](#footnote-3)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[4]](#footnote-4)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
4. En México, además de los derechos, están reconocidas las garantías para su protección, en ese sentido el párrafo tercero de artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

*“****Artículo 1.-***

*(…)*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*(…)”.*

1. Por lo anterior, se deduce que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Humano de Fuente Internacional y Constitucionalmente reconocido. Además del derecho, también se reconocen garantías para su protección, lo que vincula con el mandato del párrafo tercero del mismo artículo.
2. Así, conforme a la Constitución Política de las Estado Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México respectivamente, el cumplimiento de las garantías primarias, entendidas como obligaciones inmediatamente relacionadas con el Derecho de Acceso a la Información Pública, permiten que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones lo respeten, protejan y garanticen.

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6.-***

*…*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****.* ***Para el ejercicio del derecho de acceso a la información****, la Federación y* ***las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

***“Artículo 5****.-*

*…*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho****.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

***Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes****:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

1. *Según* el artículo 150 de la Ley de Transparencia del Estado, la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares*, contemplando el derecho de las personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena.
2. El Derecho de Acceso a la Información se garantiza y respeta oportunamente, y según lo que dispone la Ley, las *solicitudes de acceso a la información*.
3. Así, entonces, se procede analizar, en primer lugar, si el **SUJETO OBLIGADO** al atender la solicitud de acceso a la información, satisfizo la garantía primaria del derecho según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en segundo término si cumplió con su deber de respetar y garantizar el derecho, entregando la información solicitada.

**II. De la información solicitada y la respuesta del SUJETO OBLIGADO**

1. Derivado del Planteamiento de la Litis, se procede a analizar el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico y con ello, este Órgano Garante dicte la resolución correspondiente, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Para realizar un correcto análisis de las actuaciones de las partes, es necesario realizar el siguiente recuadro:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Información solicitada del Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública y del Director de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos** | **Información proporcionada** | **¿Colma?** |
| 1 | Ser ciudadano o ciudadana del Estado de México, preferentemente vecino del municipio, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  | INE | SI |
| 2 | No estar inhabilitado o inhabilitada para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública;  | Constancia de no inhabilitación | SI |
| 3 | No haber sido condenado o condenada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad;  | Certificado de no antecedentes penales | SI |
| 4 | Tener Licenciatura y preferentemente especialización en seguridad pública, o contar con experiencia mínima de un año en la materia, y  | Currículum vitaeCertificado de estudios | PARCIALMENTE(Se testó la fotografía en los certificados y no se proporcionó el currículum) |
| 5 | Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia. | Se informó que después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y digitales que obran en la Subdirección de Recursos Humanos no se localizó el documento. | NO |
| 6 | Currículum vitae | Se entregó una liga electrónica de acceso directo en **formato cerrado**. | NO |
| 7 | Cédula profesional; | No se pronunció | NO |
| 8 | Certificación de control de Confianza; | Se informó que después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y digitales que obran en la Subdirección de Recursos Humanos no se localizó el documento. | NO(No se emitió el Acuerdo de Inexistencia respectivo) |
| 9 | Certificado Único Policial | Se informó que después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y digitales que obran en la Subdirección de Recursos Humanos no se localizó el documento. | NO(No se emitió el Acuerdo de Inexistencia respectivo) |
| 10 | No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. | No se pronunció. | NO |
| 11 | Recibo de Nómina. | Se entregó una liga electrónica de acceso directo en **formato cerrado**. | NO |

1. Inconforme con las respuestas emitidas, el Particular interpuso los recursos de revisión respectivos, donde señaló *grosso modo*, **la entrega de información incompleta.**
* **Puntos 1, 2 y 3.**
1. Es de mencionar que, los **requerimientos identificados con los números 1, 2 y 3** fueron atendidos mediante los documentos entregados en respuesta por el **SUJETO OBLIGADO,** como se expuso en el cuadro descriptivo.
2. En este sentido, resulta conveniente señalar que, la materia elemental del derecho de acceso a la información pública, se basa en documentos que obren en archivos de los Sujetos Obligados, conforme lo que dispone el artículo 4 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios:

“***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.***

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información* *que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.”*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública**serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos*** *y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

1. De los preceptos legales en cito, se desprende que, los Sujetos Obligados deben poner a disposición de cualquier persona que lo solicite, toda la información que obre en sus archivos y en el estado en que se encuentre, no comprende la obligación de procesar, ni presentarla conforme a los intereses del particular.
2. En síntesis, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública, toda vez que los Sujetos Obligadosno tienen el deber de generar, poseer o administrar la información pública con el grado de detalle que se señala en la solicitud de información pública; esto es, que no tienen el deber de generar un documento ***ad hoc***, para satisfacer el derecho de acceso a la información pública.
3. Como apoyo a lo anterior, es aplicable el Criterio 09-10, emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que dice:

*“****Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información.*** *Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.*

*Expedientes:*

*0438/08 Pemex Exploración y Producción – Alonso Lujambio Irazábal*

*1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. – María Marván Laborde*

*2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Jacqueline Peschard Mariscal*

*5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Ángel Trinidad Zaldívar*

*0304/10 Instituto Nacional de Cancerología – Jacqueline Peschard Mariscal”*

1. La ley no prevé la elaboración de documentos ad hoc para la atención a las solicitudes de acceso a la información pública, por lo que los Sujetos Obligados deben proporcionar la información que obre en sus archivos en el estado en que se encuentre, sin la necesidad de realizar generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.
2. Entonces, al haber entregado la información requerida por el particular permite conocer la información que obra en sus archivos en el estado en el que se encuentra.
3. En consecuencia, al haber existido un pronunciamiento por el Sujeto Obligado indicando la información de interés para el particular, con la información que obra en sus archivos, es que no se puede dudar de la veracidad. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía el criterio 31-10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que a la letra dice:

***El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados.****El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.”*

1. Este Órgano Garante carece de facultades para dudar de la veracidad sobre la información proporcionada por el Sujeto Obligado, en consecuencia, debe declararse atendido dicho requerimiento, en términos del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios:

***Artículo 166.*** *La obligación de acceso a la información pública se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice la consulta de la misma en el lugar en el que ésta se localice.*

1. Por lo que, los **puntos 1, 2 y 3** quedan atendidos con la información proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO,** en el mismo sentido, **se advierte que no existe obligatoriedad de que los servidores públicos actualicen de manera periódica la información que presentaron para el ingreso al servicio público.** **Por lo que al haber proporcionado la información que obra en sus archivos en el estado en el que se encuentra, se tiene por satisfecho el derecho del Recurrente.**
2. Ahora bien, no pasa desapercibido mencionar que se remitieron dos credenciales para votar para dar atención al **punto 1** de la solicitud de información.
3. No obstante, **se advierte que este documento se debió clasificar en su totalidad**, ya que todos los elementos contenidos en ella hacen a su titular, identificado, identificable e incluso ubicable en su domicilio. El número o la clave de la credencial de elector, son únicos e irrepetibles y; de manera general este documento es utilizado para identificarse al momento de realizar trámites oficiales y de tipo privado, incluso en algunos lugares se tiene por costumbre tomar datos de la credencia para asentar en un documento como manera de acreditar la presentación de su titular y comprobar que la credencial se tuvo a la vista, por ello su relevancia y lo delicado de su uso.
4. Es de tener presente que la finalidad esencial de la credencial para votar con fotografía es la de ejercer el derecho humano de votar y ser votado; sin embargo, en el país, este documento es el reconocido a nivel general como medio idóneo para identificarse incluso de manera oficial; en el Estado de México está reconocida como identificación oficial en el artículo 2.5 Bis, fracción II del Código Civil del Estado de México.
5. Dada esta relevancia y que no guarda relación directa con el ejercicio de atribuciones de servidores públicos es que su contenido debe ser analizado en función del documento total, ya que esta obra por ser el medio preferible de identificación como ciudadano y no en función del cargo público, por lo que se entiende que se analizan en su conjunto los datos personales contenidos en la misma, con excepción del nombre; por lo que, en el presente caso, se considera que la credencial de elector, es confidencial y actualiza la causal de clasificación, establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
* **Puntos 5, 8 y 9**
1. Por lo que corresponde a la información requerida en los **puntos 5, 8 y 9** los cuales se relacionan con lo siguiente:
* **Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia;**
* **Certificación de control de Confianza;**
* **Certificado Único Policial**
	+ 1. **Examen de control y confianza y certificado único policial.**
1. Derivado de la naturaleza de la información requerida, es necesario traer a contexto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el artículo 66 y el diverso 109 de la Ley de Seguridad del Estado de México, establecen que la certificación es el proceso por el cual **los integrantes de las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia se someten a las evaluaciones establecidas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México.**
2. En ese contexto, el Centro de Control de Confianza del Estado de México, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado de la Secretaría de Seguridad, cuyo objeto es realizar las evaluaciones permanentes de control de confianza, de desempeño, poligrafía, entorno social y psicológico, así como exámenes toxicológicos a los aspirante e integrantes de las instituciones de seguridad pública y privada, estatal y municipal, **a fin de emitir la certificación correspondiente.**
3. Además, que **ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública sin contar con el Certificado y registro vigentes.**
4. En ese contexto, el artículo 5°, fracciones VIII, IX y X, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el diverso 6°, fracciones XI y XII, de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece lo siguiente:
* **Instituciones Policiales:** Son los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, detención preventiva, centros de arraigo y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.
* **Instituciones de Procuración de Justicia:** Son aquellas de la Federación y Entidades Federativas que integran el Ministerio Público, los servicios periciales, policías de investigación y auxiliares.
* **Instituciones de Seguridad Pública:** Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.
1. Sobre lo anterior, el Instructivo de llenado del Formato “Personal de Seguridad Pública”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las instituciones de seguridad pública, se integran por los siguientes categorizaciones de puestos:
* **Mando:** Se conforma por el personal con funciones de dirección, coordinación y supervisión, es decir, los altos mandos y mandos medios y superiores.
* **Operativos:** Integrado por el personal que desempeña funciones de campo (policiacas, especializadas y no tienen funciones de mando), tales como la Policía Ministerial, Judicial, Estatal Preventiva, Municipal, escoltas, grupos antisecuestro, terrorismo, inteligencia, grupos de reacción o equivalentes.
* **Administrativos:** Conformado por el personal de apoyo.
1. Por su parte, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación[[5]](#footnote-5) para obtener el certificado es obligatorio que los elementos **acrediten contar con evaluación de control y confianza**, formación inicial o equivalente, evaluación de competencias básicas o profesionales y la evaluación del desempeño.
2. En ese sentido, es de destacar que el objetivo del certificado es garantizar que la población cuente con policías confiables que tengan como único objetivo el de velar por la seguridad, por ello, que toda vez que **es un requisito el contar con el Certificado Único Policial para estar adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio** y para esto, **es necesario contar con la acreditación de la evaluación de control y confianza.**
3. Respecto a lo anterior, de conformidad con la página oficial de la Secretaría de Seguridad[[6]](#footnote-6), el examen de control de confianza se compone de cinco evaluaciones, las cuales contribuyen a verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad institucional, así como el personal de nuevo ingreso se apegue a los principios institucionales de acuerdo con el perfil del puesto.
4. Asimismo, es de mencionar que, para la expedición del certificado, el proceso de evaluación se realiza en tres días, donde en el día uno, se llevará a cabo la evaluación, toxicológica, investigación de antecedentes, evaluación psicológica, evaluación socioeconómica y evaluación médica; en el día dos, se realizará una evaluación poligráfica y por último, en el día tres, se ejecutará una visita domiciliaria, tal como se observa a continuación:



1. Ahora bien, es importante no perder de vista que el examen de control y confianza comprende también los exámenes antidoping o toxicológicos, pues forman parte del proceso de evaluación realizado para obtener la certificación correspondiente y cuya aplicación le corresponde al Centro de Control de Confianza del Estado de México, a través de la Dirección Médica y Toxicológica, como se muestra a continuación:

***MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN MÉDICA Y TOXICOLÓGICA DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO***

*…*

*La Dirección Médica y Toxicológica es la unidad administrativa responsable de realizar las evaluaciones toxicológicas de control de confianza, así como de la emisión, entrega de resultados y la emisión de los certificados correspondientes.*

1. En ese sentido, toda vez que los exámenes referidos forman parte conjunta del proceso de evaluación para obtener la certificación de aprobación de los exámenes de control y confianza y, es el Centro de Control de Confianza, la dependencia encargada de aplicar y expedir el certificado de aprobación o no aprobación, se colige que en los archivos del Ayuntamiento, no obran los documentos que dan cuenta de los resultados de los exámenes toxicológicos, **sino únicamente cuentan con los certificados que refieren si los servidores públicos son aptos o no aptos para desempeñar el cargo.**
2. Por ello, debido a que el **SUJETO OBLIGADO** únicamente cuenta con la información relativa a los resultados de la aplicación de los exámenes de control y confianza, obtenidos conjuntamente derivados del proceso de la aplicación de otras evaluaciones (médica, toxicológica, psicológica, económica).
3. Ahora bien, el Manual General de Organización del Centro de Control de Confianza del Estado de México, precisa que la Unidad de Evaluación será la encargada de emitir el reporte con el resultado final de las evaluaciones de control de confianza, mismo que será reportado a las instituciones de seguridad pública.
4. Asimismo, se establece que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, aplicará las evaluaciones para selección del aspirante y para la permanencia, el desarrollo y la promoción de elementos de la corporación, esto es realizará los procedimientos de evaluación y de control de confianza; además, que los resultados de todos los exámenes serán reportados directamente a la institución de seguridad pública, el cual podrá ser de la siguiente forma:

*a) Apto: Corresponde aquel que refleja los resultados satisfactorios a los requerimientos de la totalidad de los exámenes de la evaluación;*

*b) Recomendable con observaciones: Sucede en aquellos casos que se cumplen con los parámetros de cualquiera de los exámenes, pero existen características que deben marcarse en situaciones críticas por posibles inconsistencias en los resultados; y*

*c) No Apto: Aplica cuando no se aprueban los exámenes.*

1. Entonces, al ser reportados los resultados directamente a la Institución de Seguridad Pública a la que pertenece el elemento de seguridad, se determina que la información debe obrar en posesión del **SUJETO OBLIGADO**, motivo por el cual, al haberse pronunciado el servidor público habilitado correspondiente y referir que no obran en los archivos de la Dirección a su cargo, se deberá emitir el Acuerdo de Inexistencia respectivo
2. **Sobre el Certificado Único Policial (CUP)** es necesario traer a colación el artículo 1° de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, que establece que dicho documento acredita a los policías como aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública, y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
3. En ese orden de ideas, los artículos 41, fracción V, y 85, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que los integrantes de las Instituciones Policiales tienen la obligación de obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial que expedirá el centro de control de confianza respectivo.
4. En el mismo sentido, los artículos 21, fracción XVIII, 22, fracción XI, y 100, fracción IV, inciso i) de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública tienen la obligación de obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; por lo que, los Presidentes Municipales tienen la atribución de verificar que los integrantes de las instituciones policiales a su cargo se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial; además, que el Director de Seguridad Pública Municipal, será el encargado de informar al Presidente Municipal de los resultados y procesos de verificación y evaluaciones de confianza a los que se sometan los integrantes de las instituciones policiales a su cargo.
5. Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con el artículo 29, fracción XIV, de la Ley en cita, establece que la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública tiene entre sus funciones, la de proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial.
6. Al respecto, dada la naturaleza de la información que se analiza, es oportuno hacer referencia en el presente estudio, al Anexo del Acuerdo 07/XL/16, a través del cual el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento al Acuerdo CNSP 13/XXXIX/15, aprueba los Lineamientos para la emisión, desarrollo e implementación del Certificado Único Policial, los cuales precisan lo siguiente:
* Que el Certificado Único Policial permitirá acreditar que el servidor público resultó aprobado para ingresar o permanecer en las Instituciones Policiales que cuenta con las competencias necesarias para el desempeño de su cargo;
* Que el Certificado Único Policial es requisito de permanencia para los integrantes de las instituciones policiales, mientras que el certificado previsto en el artículo 65 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que es requisito de ingreso y permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia;
* Que en términos del artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los policías de investigación que forman parte de la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia deben obtener el Certificado Único Policial;
* Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, mediante Acuerdo 13/XXXIX/15 ratificó elAcuerdo 2, adoptado en la XIV Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el cual establece los requisitos que debe tener el Certificado Único Policial: evaluación de control de confianza, formación inicial y/o equivalente, evaluación del desempeño y evaluación de competencias policiales básicas (habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial); así como instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a establecer un grupo de trabajo interinstitucional, para determinar los lineamientos y políticas generales para la emisión, desarrollo e implementación del Certificado Único Policial.
1. En relación con lo expuesto, el artículo 6°, fracción V, de los Lineamientos citados, establece que para la emisión del Certificado Único Policial, el integrante de las Instituciones deberá acreditar:

a) El proceso de evaluación de control de confianza;

b) La evaluación de competencias básicas o profesionales;

c) La evaluación del desempeño o del desempeño académico, y

d) La formación inicial o su equivalente.

1. Lo anterior, se robustece con el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, establece que el Certificado Único Policial, es una herramienta que permite certificar que el personal que integra las instituciones de seguridad pública, tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones; además que, para obtener dicho documento, los policías municipales deberán contar con un resultado aprobatorio y vigente, lo siguiente:
* Evaluación de control de confianza;
* Evaluación de competencias básicas o profesionales;
* Evaluación del desempeño, y
* Formación inicial o equivalente.
1. Así, el Certificado Único Policial que emite el Centro de Control de Confianza del Estado de México, acredita que el personal dedicado a la seguridad pública cumple con las evaluaciones y formación, para ocupar un cargo de seguridad pública; por lo que, es un requisito indispensable, para poder entrar y permanecer en una institución de seguridad pública.
2. Conforme a lo anterior, se logra vislumbrar que la pretensión de **la parte Recurrente**, es obtener, el certificado único policial de los servidores públicos referidos en la solicitud de información, el cual es un requisito para el ingreso y permanencia dentro de las Instituciones de Seguridad Pública, por lo que se determina que la información obra en posesión del **SUJETO OBLIGADO**, por lo que se **ORDENA** entregar el soporte documental correspondiente.
3. Asimismo, no pasa desapercibido que, al tratarse del **Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública y del Director de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos, al encontrarse dentro de los mandos medios y superiores, prevalece la publicidad de su información.**
4. No obstante, toda vez que el Servidor Público Habilitado correspondiente refirió que los documentos no obran en los archivos de la Dirección a su cargo, se deberá emitir el Acuerdo de Inexistencia respectivo.
5. En este sentido, el **SUJETO OBLIGADO** en todo tiempo deberá cumplir con las formalidades exigidas por el marco jurídico y, al dar cumplimiento a la resolución, deberá acreditar la búsqueda exhaustiva y de ser el caso que no se localice la información, tendrá que emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia, que se hará del conocimiento del **RECURRENTE**, en los siguientes términos:
	1. Deberá emitir el Acuerdo de Inexistencia respectivo, en el entendido, que el acto de autoridad debe estar debidamente fundado y razonado.
	2. Señalará el lugar y fecha de la resolución, el nombre de la solicitante, la información solicitada, el fundamento y motivo por el cual se determina que la información solicitada no obra en sus archivos, los nombres y firmas autógrafas de los integrantes del Comité de Información.
6. Lo anterior es así, toda vez que **es necesaria** la emisión del acuerdo de inexistencia en aquellos casos en que el **SUJETO OBLIGADO** hay generado o poseídola información solicitada empero previa búsqueda exhaustiva y minuciosa de la misma, no la localice.
7. En ese caso, su Comité de Transparencia tiene el deber de emitir un Acuerdo de Inexistencia, el cual -se insiste-, se dicta en aquellos supuestos en los que si bien la información solicitada la genera, posee o administra el **SUJETO OBLIGADO** en el marco de las funciones de derecho público; sin embargo, éste no lo posee por la razones que se deben expresar a través de un acuerdo debidamente fundado y motivado esto en estricto apego a lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Ley de la materia.
8. En otras palabras, hablar de información inexistente implica la alta responsabilidad de explicar a la ciudadanía por qué un ente público que tiene la facultad y el deber de generar, poseer o administrar su información pública no la tiene.
9. Criterios y fundamentos que el **SUJETO OBLIGADO** deberá considerar para la emisión del Acuerdo por el cual se declare la inexistencia de la información peticionada.
* **Punto 4.**
1. Por lo que corresponde a la información requerida en el **puntos 4,** relativo a los **Certificados de estudios** de los Servidores Públicos referidos en las solicitudes de información respectivamente, se advierte que, si bien el **SUJETO OBLIGADO** remitió la información, se realizó una versión pública incorrecta, toda vez que se testó la fotografía, siendo este un dato carácter público.
2. Al respecto, es de señalar que estas fotografías dan cuenta de las características físicas de los servidores públicos; por lo que, no debe perderse de vista que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada en dibujo, pintura, escultura, fotografía, y video; la imagen así captada puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios, desde volantes impresos de la forma más rudimentaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisión cine, video, correo electrónico o Internet.
3. Así, dichos datos constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual; lo que en el presente caso, acreditaría e identificaría a una persona como servidor público, por lo que es posible advertir que existe cierto interés público, cuando la fotografía obra en documentos de servidores públicos vinculados con el cumplimiento de disposiciones legales.
4. Por lo anterior, cuando las fotografías de los servidores públicos obran en documentos que dan cuenta del cumplimiento de funciones, requisitos legales o los acredita como servidores públicos, no puede ser clasificado como confidencial, pues en este caso, es superado por el interés público de conocer si en realidad, la persona que se ostenta en carácter de servidor público, se encuentra en ese encargo, si realiza las funciones o si cumple con los requisitos legales; sin que se considere como factor diferenciador para determinar la publicidad o clasificación el cargo o nivel jerárquico en el que se desempeñe el servidor público.
5. En este sentido, las fotografías de servidores públicos sin importar el nivel o rango guardan la naturaleza de públicas (con excepción del personal operativo en materia de seguridad) y no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que en las versiones públicas que se ordenen, no podrá clasificarse esa información,
6. En consecuencia, **la fotografía de los servidores públicos, es de acceso público y no procede su clasificación como información confidencial**, aún y cuando corresponde a un dato personal.
7. Por otro lado, se precisa que, el **SUJETO OBLIGADO** no proporcionó el Acuerdo de Comité del Transparencia, por medio del cual, se propuso y aprobó la clasificación de diversos datos como información confidencial.
8. En este sentido, es importante señalar que la clasificación total o parcial de la información requerida mediante solicitud de acceso a la información pública, constituye una restricción al derecho humano de acceso a la información.
9. En este caso, la clasificación total o parcial de la información es un supuesto que tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establecen el procedimiento legalmente establecido, para ello.
10. Al respecto, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así Como para la Elaboración de Versiones Públicas, por cuanto hace a la clasificación de la información, señalan lo siguiente:
11. Así, una vez hecho lo anterior, **se remite la información al Titular de la Unidad de Transparencia, con el acuerdo de clasificación correspondiente, para que sea sometido al conocimiento del Comité de Transparencia.**

**La intervención del Comité de Transparencia.**

1. **Formalidades para emitir el Acuerdo de Clasificación.**
2. El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos 128 y 103 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, y la fracción III del numeral Segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en adelante los Lineamientos Generales, cuenta con las facultades para **confirmar, modificar o revocar** la clasificación de la información que ha hecho el titular del área que administra la información. Por lo tanto, el Comité **no aprueba** la clasificación, sino que revisa lo que ha hecho el titular del área y confirma, modifica o revoca la decisión a través de un acuerdo.
3. Evidentemente, esta decisión implica una restricción a un derecho humano, por lo tanto, puede generar un agravio al Particular y, en consecuencia, es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello, es decir, que cumpla con el principio de reserva de ley, por lo que no está demás señalar que el artículo 45 de la Ley Estatal, claramente señala que el Comité de Transparencia, legalmente facultado para emitir el acuerdo de clasificación, se integra por el Titular de la Unidad de Transparencia, el responsable del área coordinadora de archivos y el titular del órgano interno de control, integrado siempre por un número impar y que no debe de existir dependencia jerárquica entre sus integrantes. Cualquier otra composición del Comité puede generar vicios de legalidad de origen en el acto que restringe un derecho humano.
4. La decisión de confirmar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo aprobado por el Titular del área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia.

**b) Requisitos de fondo del Acuerdo de Clasificación.**

1. Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro.
2. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley nos aporta mayores luces para cumplir con dicha acreditación. En los artículos 131 y 105 segundo párrafo de la Ley Estatal y de la Ley General respectivamente, y el lineamiento sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales, al señalar que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.
3. De lo anterior, se desprende que, **para una correcta clasificación total o parcial, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas**, **es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.**
4. Por su parte, el intérprete judicial del país ha establecido una jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.*** *“La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”*

*SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.*

*Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.*

*Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.*

*Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.*

*Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.*

*Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.*

1. Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.
2. En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente por qué a través de la utilización de la norma se emitió el acto.
3. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
4. En ese caso, se precisa que, si bien se entregaron los documentos solicitados, no se proporcionó el Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia que sustente la versión pública, aunado a que, del análisis realizado.
* **Puntos 4, 6 y 11**
1. Por lo que corresponde a la información requerida en los **puntos 4, 6 y 11,** los cuales, se relacionan con lo siguiente:
* **Tener Licenciatura y preferentemente especialización en seguridad pública, o contar con experiencia mínima de un año en la materia, y**
* **Currículum vitae**
* **Recibo de Nómina.**
1. Se tiene que, el **SUJETO OBLIGADO** mediante respuesta proporcionó enlaces electrónicos donde refirió que podía ser consultada la información solicitada.
2. En ese sentido, es necesario traer a contexto lo establecido por la Ley en la materia que en términos generales, establece que uno de los objetivos con el que cuenta es el de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública, mediante los procedimientos establecidos de forma **sencilla**, expeditos, **oportunos** y gratuitos, y con ello contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan trasparentar la gestión pública y mejora la toma decisiones, a través de la difusión de la información que obra en poder de los sujeto obligados.
3. El formato prediseñado para que los particulares formulen su solicitud de acceso a la información contiene opciones para seleccionar la modalidad de entrega de la información. En el presente asunto en Particular, solicitó la información a través del SAIMEX. En consecuencia, lo idóneo es que, los Sujetos Obligados proporcionen la información por el medio solicitado; no obstante, la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado de México y Municipios establece dos puntos importantes que impactan sobre la modalidad de entrega de la información.
4. El primer punto a analizar es que la ley en materia contempla **información pública de oficio** que los Sujetos Obligados deben poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos la información pública que generen, administren o posean. El segundo punto a analizar y que guarda estricta relación con el punto anterior, se encuentra en el artículo 161 de la citada Ley de Transparencia Local:

***Artículo 161. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible*** *al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos,* ***en formatos electrónicos disponibles en Internet*** *o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información* ***en un plazo no mayor a cinco días hábiles****.* ***La fuente deberá ser precisa y concreta y no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible****.*

1. Es así que, toda aquella información que sea requerida por los particulares pero que, previamente se encuentre disponible en sitios electrónicos, como puede ser de manera enunciativa más no limitativa, el sitio oficial del Sujeto Obligado o el portal IPOMEX o las páginas institucionales. Los Sujetos Obligado pueden indicar la dirección electrónica donde obra la información solicitada. Esta dirección electrónica debe ser precisa, de tal modo que no implique realizar una búsqueda en toda la información que ahí se encuentre. Además, debe ir acompañada del procedimiento a seguir, en caso de que la información se encuentre en distintos puntos del sitio electrónico referido. **La orientación** que realicen los Sujetos Obligados a los sitios electrónicos para la consulta de la información **debe cumplir con las características de tiempo y forma.**
2. Para que la orientación se encuentre en tiempo, debe realizarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles. En este caso, el Recurrente presentó sus solicitudes en fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, por lo que, el plazo de cinco días para señalar los sitios electrónicos en donde obra la información transcurrió del veintiuno al veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por lo que evidentemente se encuentra fuera del plazo que señala la normatividad en materia, lo que trae como consecuencia que **la orientación no se encuentre en tiempo**.
3. Ahora bien, la normatividad en materia establece que las direcciones electrónicas deben ser precisas, de tal modo que no implique que el **RECURRENTE** deba de realizar una búsqueda dentro de toda la información disponible.En este caso, el **Sujeto Obligado** remitió los enlaces electrónicos como se observa continuación:





1. Así, si bien se adjuntaron las ligas electrónicas donde podría obrar la información solicitada, lo cierto es que, **no se encuentran en datos abiertos**, lo que implica una carga para el Particular pues tendría que transcribir cada una de las ligas electrónicas para acceder a la información requerida.
2. Así, es oportuno mencionar lo que debemos entender por datos abiertos, siendo estos los datos digitales de carácter público que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen como característica ser accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por las máquinas, en formatos abiertos y de libre uso.  En este mismo sentido, nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, expresa en su artículo 3, de manera textual lo siguiente:

***“VIII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:***

*a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;*

*b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;*

*c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;*

*d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;*

*e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;*

*f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;*

*g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;*

*h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;*

***i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna****; y*

*j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente.*

1. Ahora bien, el dispositivo legal estatal aplicable a la materia, establece en su artículo 41 que el Instituto promoverá la publicación de la información en datos abiertos y accesibles, de tal manera que este Órgano Garante se encuentra en posibilidades de **ordenar al SUJETO OBLIGADO, entregar los currículum vitae y recibos de nómina requeridos, en el formato solicitado.**
* **Punto 7**
1. Por lo que corresponde a la información requerida en el **puntos 7,** el cual, se relaciona con la **cédula profesional** de los Servidores Públicos referidos en las solicitudes de información respectivamente, se advierte que, el **SUJETO OBLIGADO** fue omiso en emitir pronunciamiento.
2. En este sentido, se tiene que **la *Cédula Profesional*,** **es una expresión documental con validez legal**, para certificar o demostrar que efectivamente una persona está calificado para ejercer la profesión para la cual se ha preparado; y, en lo particular **la cédula acredita que se ha recibido un título profesional,** conforme a lo referido en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (consultada en la liga <http://consultatucedula.mx/>).
3. En ese orden de ideas, debe tenerse presente que la naturaleza del ***título y/o* *cédula profesional*,** consiste en la de ser documentos de identificación para que a sus titulares, los acrediten como profesionales o expertos en algún área de estudio o conocimiento frente a terceros; por lo que, proporcionar dicha información abona a la transparencia y a la rendición de cuentas, pues sirven a la ciudadanía para comprobar que las personas que se desempeñan como servidores públicos tienen el perfil idóneo, la capacidad, las habilidades y la pericia para desarrollar las actividades y atribuciones que se deriven de su encargo.
4. Así, resulta conveniente reiterar lo establecido por el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que refiere que para ingresar al servicio público se requiere, entre otras cosas, cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos, como es el nivel académico.
5. En este sentido, es de señalar que la ***cédula profesional*,** es aquella expresión documental con validez legal, para certificar o demostrar que efectivamente una persona está calificado para ejercer la profesión para la cual se ha preparado y ha recibido un título profesional, conforme a lo referido en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (consultada en la liga <http://consultatucedula.mx/>).
6. Por lo que **dicho documento, es aquel que adquiere toda persona a quien legalmente se le haya expedido *título profesional o grado académico equivalente***, con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado la cual es otorgada por la **Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública**, ya que **dicha autoridad tiene atribuciones para expedir la cédula correspondiente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales,** lo anterior toma sustento en los artículos 3° y 23, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México.
7. Así, los documentos que dan cuenta de la preparación académica sirven como medios de identificación, para que a su titular lo relacionen con el nivel de estudios con que cuenta, tales como el ***título y/o cédula profesional***, independientemente de que estos sean o no medios de identificación oficiales.
8. Expuesto lo anterior, se reitera que la pretensión del **RECURRENTE** es obtener la ***Cédula Profesional o documento análogo*** de servidores públicos que ostentan cargos medios o superiores, en este sentido, se concluye que el **SUJETO OBLIGADO** no satisfizo el derecho de acceso a la información, por lo cual, deberá hacer entrega de estos documentos, previa búsqueda exhaustiva y razonable.
9. Si de la búsqueda exhaustiva y razonable no se localiza las cédulas profesionales solicitadas, bastara con que así lo manifieste el **SUJETO OBLIGADO**, en términos del artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Transparencia Local.
10. Ahora bien, respecto a la **fotografía de los servidores públicos**, es necesario señalar que estas dan cuenta de las características físicas de los servidores públicos; por lo que, no debe perderse de vista que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada en dibujo, pintura, escultura, fotografía, y video; la imagen así captada puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios, desde volantes impresos de la forma más rudimentaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisión cine, video, correo electrónico o Internet.
11. Así, dichos datos constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual; lo que en el presente caso, acreditaría e identificaría a una persona como servidor público, por lo que es posible advertir que existe cierto interés público, cuando la fotografía obra en documentos de servidores públicos vinculados con el cumplimiento de disposiciones legales.
12. Por lo anterior, cuando las fotografías de los servidores públicos obran en documentos que dan cuenta del cumplimiento de funciones, requisitos legales o los acredita como servidores públicos, no puede ser clasificado como confidencial, pues en este caso, es superado por el interés público de conocer si en realidad, la persona que se ostenta en carácter de servidor público, se encuentra en ese encargo, si realiza las funciones o si cumple con los requisitos legales; sin que se considere como factor diferenciador para determinar la publicidad o clasificación el cargo o nivel jerárquico en el que se desempeñe el servidor público.
13. En este sentido, las fotografías de servidores públicos sin importar el nivel o rango guardan la naturaleza de públicas (con excepción del personal operativo en materia de seguridad) y no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que en las versiones públicas que se ordenen, no podrá clasificarse esa información.
14. En consecuencia, la fotografía de los servidores públicos, es de acceso público y no procede su clasificación como información confidencial, aún y cuando corresponde a un dato personal.
15. Ahora bien, sobre la firma de los Servidores Públicos, cabe precisar que, en el presente caso, se trata de los servidores públicos en su calidad de particular, por lo que, es de señalar que la firma es un dato personal confidencial y únicamente será público dicho dato cuando sirva para la emisión de un acto de autoridad, en ejercicio de sus funciones.
16. Lo anterior, es así, toda vez que la firma de servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública es información de naturaleza pública, pues documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones, lo cual acontece en el presente caso, pues garantiza que los trabajadores recibieron sus remuneraciones quincenales.
17. La publicidad de dichos datos, se robustece, con el Criterio de Interpretación, de la Segunda Época, con clave de control SO/002/2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Firma y rúbrica de servidores públicos.****Si bien la firma y la rúbrica son datos personales confidenciales, cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es pública.”*

1. Conforme a lo expuesto, en el presente caso, procede la clasificación, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
* **Punto 10**
1. Por lo que corresponde a la información requerida en el **puntos 10,** el cual, se relaciona con el **Certificado de NO Deudor Alimentario Moroso** de los Servidores Públicos referidos en las solicitudes de información respectivamente, se advierte que, el **SUJETO OBLIGADO** fue omiso en emitir pronunciamiento.
2. Relativo a lo anterior, el Decreto número 325 publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el catorce de noviembre de dos mil catorce, en la exposición de motivos, refiere que, como una medida para garantizar el interés superior de los menores, se creó el Registro de Deudores Alimentarios del Estado de México, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los padres para con sus hijos.
3. En este sentido, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf>, en sus artículos 1, 13, 18 y 46, regula de manera enunciativa y no limitativa, entre otros derechos, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos, derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, el recibir alimentos para lograr el sano desarrollo del menor en su ámbito, bio-psico-social, y establece como obligación de los progenitores para con sus hijos, el proporcionarles, apoyo, cuidados, educación y protección a su salud.
4. De ahí que, se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuyo objeto es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para que con ella integre al Registro Nacional de Obligaciones.
5. La calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual, **será público** con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Es de recalcar que las Autoridades de los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; es decir, la denominación que se le dio fue el de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ya que, la palabra moroso deriva de mora; la mora es el retraso en el cumplimiento de las obligaciones y se incurre en ella desde el momento en que feneció el plazo que se señaló para el cumplimiento de una obligación.
6. Al respecto, en el Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones para crear el Registro de Deudores Alimentarios del Estado de México, disponible en la dirección electrónica https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014 /nov144.PDF, advierte lo siguiente:

*“4.146 Bis.- El área del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, es una unidad administrativa del Registro Civil. Actos inscribibles en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos*

*4.146 Ter.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se inscriben a las personas que el Juez de lo Familiar determina en términos del artículo 4.136 del presente Código. Serán objeto de registro los empleadores que incumplan una orden de descuento para alimentos ordenada por el órgano jurisdiccional.*

***De los datos que contendrá el Registro de Deudores Alimentarios Morosos***

*Artículo. 4.146 Quáter.- El Registro de Deudores Alimentarios Morosos contendrá:*

*I. Nombre y Clave Única del Registro de Población del deudor alimentario;*

*II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios;*

*III. Datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso; IV. Monto de la pensión decretada o convenida, en su caso, número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;*

*V. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro;*

*VI. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción.*

*Una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior se girará oficio al Instituto de la Función Registral del Estado de México, a efecto de que se anote el certificado de deudor**alimentario en los folios reales de que sea propietario el deudor alimentario.*

*El Instituto de la Función Registral informará al Registro Civil si fue procedente la anotación, en cuyo caso dará aviso al Juez del conocimiento para que el acreedor alimentario haga cobrable las cantidades adeudadas en la vía judicial respectiva.*

*Datos del Certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos*

*Artículo 4.146 Quinquies.- El Certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos contendrá lo siguiente:*

*I. Nombre y Clave Única de Registro de Población del solicitante;*

*II. La información sobre su inscripción o no en el registro de deudores alimentarios morosos.*

*De ser el caso que el solicitante se encuentre inscrito en el registro, la constancia incluirá además lo siguiente:*

*I. Número de acreedores alimentarios;*

*II. Monto de la pensión alimenticia decretada o convenida;*

*III. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro;*

*IV. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción.*

*El Certificado a que se refiere el presente artículo será expedido el mismo día hábil de su solicitud.*

*…”*

1. Ahora bien, respecto a aquellos servidores públicos que se encuentren o no inscritos en dicho registro, procedería su entrega en versión pública, ya que al ser un **requisito sine qua non para ingresar al servicio público,** se convierte en información que da certeza a la ciudadanía de que el Servidor Público cumplió con los requisitos señaladospor el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal.
2. Derivado de lo anterior, cualquier ciudadano que desee obtener dicha información, podrá ingresar a la Ventanilla Electrónica Única, en la que accederá con su CUTS y contraseña, capturando los datos como son CURP, nombre, primer y segundo apellido, y se comenzará la búsqueda de lo solicitado, en el que arrojará si se encuentra en calidad de deudor o no.
3. En este sentido, se advierte que al ser un requisito indispensable y preponderante, el **SUJETO OBLIGADO** deberá hacer entrega de dicho documento que dé cuenta de que no es una persona que ha incumplido con las obligaciones alimentarias, en caso de que estas existan, toda vez que si bien, debe considerarse que se trata del ámbito privado, esta determinación se toma en función de la preponderancia del interés superior del menor, por tal motivo, un requisito para que las personas puedan laborar en el servicio público es justamente, cumplir con las obligaciones que adquieran con sus menores hijos, porque al haberlas cubierto, no formarán parte de ese registro, no pasa desapercibido, que el Certificado de No Deudor Alimentario, pudiere contener información confidencial, como lo es el CURP y R.F.C.

**QUINTO. De la versión pública.**

1. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitada, eventualmente pudieran obrar datos personales susceptibles de protegerse, y toda vez que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México tiene el deber de velar por la protección de los datos personales aun tratándose de servidores públicos y en su caso generar la versión pública de los documentos por las consideraciones que se estimen pertinentes.
2. La clasificación total o parcial de la información requerida, mediante solicitud de acceso a la información pública, constituye una restricción al derecho humano de acceso a la información. Actualmente, el grave problema que enfrentamos son los Acuerdos de Clasificación de la Información que emiten los **SUJETOS OBLIGADOS**, ya que no observan los requisitos que deben de llevar a cabo para la realización de la clasificación de la información, tanto por la complejidad del procedimiento como por la falta de atención de los operadores jurídicos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia. Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.El **SUJETO OBLIGADO** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto. Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación.  | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación. De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial.  | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular. En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección. Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

* **Del análisis de los datos susceptibles de ser protegidos.**
1. Bajo lo anterior, es importante analizar los datos personales susceptibles de ser protegidos, que pudieran estar contenidos en los **recibos de nómina** de los servidores públicos referidos en la solicitud de información, tales como **Registro Federal de Contribuyentes (RFC),** la **Clave Única de Registro de Población (CURP)**, la **Clave de ISSEMyM** u análogos, **préstamos o descuentos** realizados al servidor público y la **clave interbancaria de depósito.**

**a) Del Registro Federal de Contribuyentes.**

1. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave alfanumérica que se compone de trece (13) caracteres. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los dos primeros caracteres, corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primero nombre, seguido del año de nacimiento, mes y día, los tres últimos dígitos son la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
2. Las personas físicas obligadas a presentar declaraciones o expedir comprobantes fiscales, deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. La clave del RFC es el medio por el cual el Servicio de Administración Tributaria exige y vigila el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, además que identifica como contribuyentes a las personas físicas o morales en nuestro país.
3. Del mismo modo, el Registro Federal de Contribuyentes permite tener acceso a programas sociales o becas, obtención de créditos y apoyos, apertura cuentas bancarias, participar en Afores, e incluso es un requisito indispensable para realizar el trámite de ingreso a un empleo.
4. De lo anteriormente expuesto, el Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personal concerniente a una persona física identificada o identificable, cuya exposición vulneraría la esfera privada del servidor público, e incluso pudiese dar pauta a la configuración de un delito fiscal.
5. En el mismo sentido, resulta aplicable el Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, en el cual se señala lo siguiente:

***REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DE PERSONAS FÍSICAS.*** *“El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.”*

**b) De la Clave Única de Registro de Población.**

1. La Clave Única de Registro de Población (CURP) según lo establecido en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, la CURP es un elemento que permite registrar de forma individual a las o los mexicanos, así como a los extranjeros que se encuentren en condiciones de estancia regular en el país o en trámite de ésta, se integra por dieciocho (18) caracteres, los cuales son:



1. Es entonces que a partir de los datos básicos de la persona (nombre, apellido, sexo, fecha y lugar de nacimiento) encontrados en los documentos probatorios de identidad es que se genera la CURP, la cual tiene la particularidad de asegurar una correspondencia entre claves y personas.
2. Entre las características de la CURP, se encuentra:

***Composición.*** *Alfanumérica.*

***Longitud.***  *18 caracteres.*

***Naturaleza.*** *Biunívoca.*

***Universalidad.*** *Se asigna a todas las personas que conforman la población.*

***Verificabilidad. En su estructura existen elementos que permiten comprobar si fue conformada correctamente o no, así como fecha de nacimiento, sexo, identificad federativa de nacimiento y las primeras composiciones de la clave, conformadas por la letra inicial y primera vocal interna del primer apellido, la letra inicial del segundo apellido y la primera letra del nombre.***

1. Del mismo modo, los Lineamientos en comento señalan en su artículo Décimo Tercero, “Manejo de la Información” que la información contenida en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BNDCURP), tiene carácter de confidencial, por lo que su tratamiento debe ser acorde con la legislación aplicable y vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública, y protección de datos personales.
2. Es entonces que, de lo anterior, se desprende que la Clave Única de Registro de Población es un dato personal confidencial, ya que por sí releva información personal de su titular, y su exposición únicamente vulneraría la esfera privada del mismo, aunado a que no guarda relación con el desempeño profesional o laboral de un individuo ni con el ejercicio de recursos públicos.
3. Ante ello, resulta aplicable el Criterio 18/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la literalidad señala:

***CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP). “****La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.”*

**c) De la clave de identificación del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.**

1. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), es un organismo público descentralizo, con personalidad jurídica y órganos de gobierno propios, el cual otorgará las prestaciones y servicios que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
2. El artículo 9 de la Ley citada en el párrafo anterior, señala que el Instituto expedirá a los derechohabientes documento de identificación para facilitarles el acceso a las prestaciones que les corresponden conforme a Ley, dicho medio de identificación se materializa a través de una credencial expedida por el Instituto a sus derechohabientes, la cual será de naturaleza personal e intransferible y la cual deberá ser presentada siempre que se requiera un servicio de salud y demás prestaciones que brinda el organismo.
3. Entre los elementos que integra la credencial expedida se encuentra la Clave ISSEMyM, la cual permite identificar al servidor público que actualmente labora o laboró en alguna institución pública y que tenga vigente su derecho a recibir las prestaciones.
4. Como se advierte, este número asignado a los derechohabientes en un dato personal que permite la identificación de la persona que goza de las prestaciones que otorga la Institución y de qué prestaciones ha hecho uso. Es de destacar, que el Derecho de Seguridad Social es un derecho conferido a los trabajadores, cuyo objetivo es garantizar la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios, áreas que pertenecen a la esfera privada del individuo y que, su exposición no abona a la transparencia ni rendición de cuentas o el correcto ejercicio de las funciones desempeñadas por los servidores públicos, por el contrario su exhibición si provoca una transgresión a la vida pública e intimidad de la persona.

**d) Préstamos o descuentos de carácter personal.**

1. Para entender los límites y alcances de esta restricción, es oportuno traer a colación lo establecido por el artículo 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el cual señala que:

***“ARTÍCULO 84.*** *Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto de:*

***I.*** *Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;*

***II.*** *Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;*

***III.*** *Cuotas sindicales;*

***IV.*** *Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;*

***V.*** *Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores públicos;*

***VI.*** *Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de interés social;*

***VII.*** *Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;*

***VIII.*** *Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o*

***IX.*** *Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el servidor público.*

*El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en que se demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad judicial.”*

1. Como se observa, la Ley en mérito establece claramente cuáles son los descuentos o gravámenes que se relacionan con las obligaciones adquiridas como servidores públicos y aquellos que únicamente inciden en su vida privada. De este modo, los descuentos que no se relacionen con el gasto público o con el ejercicio de sus funciones, es información de carácter confidencial.

**e) Cadenas Originales** y **Sellos** **Digitales**

1. Por otra parte, las **Cadenas Originales** y **Sellos** **Digitales** forman parte del certificado de sello digital, los cuales son documentos electrónicos que de conformidad con el artículo 17-G y 29 del Código Fiscal de la Federación le permiten a la autoridad hacendaria federal garantizar una **vinculación** entre la **identidad de un sujeto o entidad** con su clave pública, lo que hace identificable a una persona o entidad, además de que dichos certificados tienen como finalidad o propósito específico firmar digitalmente las facturas electrónicas **para acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales**.
2. Por lo que hace a los **Códigos Bidimensionales** y los denominados **Códigos QR**, se trata de barras en dos dimensiones que al igual a los códigos de barras o códigos unidimensionales, son utilizados para almacenar diversos tipos datos de manera codificada, los cuales a través de lectores que pueden ser obtenidos por cualquier persona, teniendo acceso a dichos datos almacenados, los que al tratarse de recibos de nómina, generalmente, corresponde a datos personales como lo son el **Registro Federal de Contribuyentes** (RFC) y la **Clave Única de Registro de Población** (CURP), por lo cual, deberán ser protegidos.
3. **De lo anterior se desprende que cuando de la secuencia de números y letras no se advierta un Registro Federal de Contribuyentes o una Clave Única de Registro de Población, que pueda hacer identificable al titular del dato personal, no puede tenerse como dato personal y por ende información confidencial**. Por el contrario, debe considerarse que esta información incluida en los documentos fiscales, constituyen un elemento adicional que permite a cualquier persona verificar la legitimidad del documento entregado en una solicitud de acceso a la información y, por sí solos no contienen datos personales susceptibles de clasificación, ya que no hacen identificado o identificable a su titular, pues dichos datos sólo son de utilidad de manera directa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y si bien, dichas cadenas sí derivan de la información personal de los contribuyentes, esta se encontrara encriptada.
4. Por ende, el Sujeto Obligado debe atender las disposiciones en materia de protección de datos, a fin de salvaguardar los datos de particulares testando estos y emitir el debido Acuerdo que sustente la versión pública que se genere, ya que la clasificación de la información no se da por el simple mandato de la Ley, sino que es necesario que el Sujeto Obligado cuando clasifique un documento, ya sea en todo o en parte, debe atender lo dispuesto por la Ley de la materia.

**SEXTO. Vista a la Dirección General de Protección de Datos Personales.**

1. Es necesario resaltar que el recurso de revisión previsto en la Ley de la materia no es el medio para investigar y, en su caso, sancionar a servidores públicos por la falta de cuidado de la protección de datos personales; es así que, de la información remitida en respuesta a las solicitudes, se aprecia que se dejaron a la vista datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, como **fecha de nacimiento** y **sexo,** por lo que es necesario dar vista al área competente para que en ejercicio de sus atribuciones realice las investigaciones pertinentes por las omisiones detectadas atribuibles al **SUJETO OBLIGADO**.
2. Por ello, es conveniente señalar las fracciones XIV, XXII, XXIII y XXV, del artículo 82, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, que establece:

***Atribuciones del Instituto***

***Artículo 82.*** *El Instituto, además de las atribuciones encomendadas por la Ley de Transparencia y normatividad aplicable, tendrá las atribuciones siguientes:*

*(…)*

***XIV.******Formular observaciones y recomendaciones*** *a los sujetos obligados que incumplan esta Ley.*

*(…)*

***XXII.******Verificar el cumplimiento*** *de las disposiciones previstas en esta Ley a través de los procedimientos de revisión que resulten compatibles con las disposiciones de esta Ley.*

***XXIII.******Implementar*** *los* ***procedimientos*** *que resulten necesarios* ***para el cumplimiento*** *de las disposiciones de esta Ley y para asegurar la protección de datos personales de los titulares. (…)*

***XXV.******Investigar*** *las* ***posibles violaciones*** *a la seguridad de los datos personales a fin de determinar la práctica de verificaciones.*

*(…)”*

1. Por lo tanto, es menester dar vista a la Dirección General de Protección de Datos Personales de este Instituto para que en ejercicio de sus atribuciones atienda las directivas marcadas en la propia Ley de la materia, con fundamento en el artículo 82 de la Ley de la materia, el cual señala la atribución de este Órgano Garante para Investigar las posibles violaciones a la seguridad de los datos personales a fin de determinar la práctica de verificaciones.
2. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan parcialmente fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **01588/INFOEM/IP/RR/2023 y 01589/INFOEM/IP/RR/2023 acumulados,** en términos del **Considerando** **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICAN** las respuestas a las solicitudes **00075/CHALCO/IP/2023 y 00074/CHALCO/IP/2023** emitidas por el **Ayuntamiento de Chalco y se ORDENA** entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, de ser el caso en versión pública, del **Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública y del Director de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos** al veinte de febrero de dos mil veintitrés, los documentos en donde conste la siguiente información:

1. **El Acuerdo de Inexistencia relativo al resultado global de la evaluación de control de confianza (aprobado, no aprobado u homólogo) y al Certificado Único Policial;**
2. **Currículum Vitae, Ficha Curricular o documento análogo;**
3. **Cédula Profesional.**
4. **Recibo de nómina de la primera y segunda quincena de enero de dos mil veintitrés; y**
5. **Certificado de No Deudor Alimentario Moroso; y**
6. **Certificado de estudios remitidos mediante respuesta, en correcta versión pública.**

Para efectos de lo anterior se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49 fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se ponga a disposición de la parte recurrente.

Para el caso de no contar con la información que se **ORDENA** en el inciso **“C”,** bastara con que así lo manifieste, en términos del artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Transparencia Local.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado vía SAIMEX, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO. Notifíquese** al **RECURRENTE** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**QUINTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y en lo dispuesto en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o bien, vía juicio de amparo en los términos de las Leyes aplicables.

**SÉPTIMO.** Gírese oficio a la Dirección de Protección de Datos Personales de este Instituto para hacer de su conocimiento la presente resolución, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con el artículo 82, fracciones XIV, XXII, XXIII y XXV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, determine lo conducente, en términos del Considerando **SEXTO** de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EMITIENDO VOTO PARTICULAR EN LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Disponible para su consulta en <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188142/6._Capacitaci_n_FORTASEG_Centro_Nacional_de_Certificaci_n_y_Acreditaci_n.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. Disponible en <https://ccc.edomex.gob.mx/evaluaciones_de_confianza> [↑](#footnote-ref-6)